



# Asamblea General

Distr. general  
9 de agosto de 2010  
Español  
Original: inglés

---

## Sexagésimo quinto período de sesiones

Tema 69 b) del programa provisional\*

**Promoción y protección de los derechos humanos:  
cuestiones relativas a los derechos humanos,  
incluidos distintos criterios para mejorar el goce  
efectivo de los derechos humanos y las libertades  
fundamentales**

## **Consecuencias de la deuda externa y de otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales**

### **Nota del Secretario General**

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General el informe del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, Sr. Cephass Lumina, presentado de conformidad con las resoluciones 7/4 y 14/4 del Consejo de Derechos Humanos.

---

\* A/65/150.



## **Informe del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales**

### *Resumen*

En el presente informe, presentado de conformidad con las resoluciones 7/4 y 14/4 del Consejo de Derechos Humanos, se examinan los vínculos entre la deuda y el comercio. Se aduce que la coherencia en la esfera del comercio y la formulación de las políticas financieras puede contribuir al logro de mejores resultados sostenibles en materia de desarrollo, así como a una solución duradera de la deuda de los países en desarrollo y a la realización de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo en esos países.

El presente informe está estructurado de la manera siguiente: en la sección I figura una introducción al informe y se reseñan las actividades realizadas por el experto independiente desde la presentación de su informe anterior a la Asamblea General (véase A/64/289 y Corr.1) en 2009. En la sección II se exploran los vínculos entre el comercio y la deuda. También se examinan brevemente las repercusiones de la liberalización del comercio en el alivio de la deuda y los derechos humanos, se señalan algunas de las limitaciones de las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda realizadas de acuerdo con el Marco conjunto de sostenibilidad de la deuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se pide que se establezca un nuevo marco de sostenibilidad de la deuda en el que se tengan en cuenta determinadas cuestiones relativas al desarrollo sostenible y los derechos humanos. En la sección III se subraya la necesidad de que haya coherencia normativa en las esferas del comercio y las finanzas, incluida la deuda. En la sección IV figuran algunas conclusiones y recomendaciones provisionales.

# Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción.....	4
II. El nexo entre la deuda y el comercio.....	5
A. El comercio, la deuda y los derechos humanos .....	5
B. La condicionalidad y el alivio de la deuda .....	5
C. La liberalización del comercio como condición del alivio de la carga de la deuda. ...	10
D. Consecuencias de la liberalización del comercio en la deuda y los derechos humanos	11
E. Sostenibilidad de la deuda: definición, análisis y crítica.....	13
F. Sostenibilidad de la deuda: el papel del comercio .....	14
G. Enfoque de la sostenibilidad de la deuda basado en los derechos humanos.....	16
III. Necesidad de mantener la coherencia en el plano normativo.....	19
IV. Conclusiones y recomendaciones.....	20

## I. Introducción

1. En su resolución 7/4, el Consejo Derechos Humanos pidió al experto independiente que, “en su informe anual analítico al Consejo de Derechos Humanos, estudie más detalladamente las interconexiones con el comercio y otras cuestiones, como el VIH/SIDA, cuando examinara las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales” (párr. 4). En su resolución 14/4, el Consejo pidió al experto independiente que siguiera estudiando esas conexiones “cuando examine las repercusiones del ajuste estructural y de la deuda externa” (párr. 27). El Consejo le pidió también que le presentara informes analíticos sobre la aplicación de esas resoluciones e informes sobre la marcha de los trabajos a la Asamblea General (resolución 7/4, párr. 9, y resolución 14/4, párr. 33) e informara a la Asamblea sobre las consecuencias de la deuda externa y de otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (resolución 14/4, párr. 30). Atendiendo a esas solicitudes, en el presente informe se examina el nexo entre la deuda y el comercio.

2. Desde la presentación de su informe anterior a la Asamblea General (véase A/64/289 y Corr.1) en octubre de 2009, el experto independiente llevó a cabo varias actividades que se describen en sus informes al Consejo (A/HRC/14/21 y Add.1). Además, en junio de 2010, presentó su informe anual al Consejo en su 14º período de sesiones. Los días 17 y 18 de junio de 2010, realizó la primera de una serie de consultas regionales acerca del proyecto de directrices generales sobre la deuda externa y los derechos humanos<sup>1</sup>, como había pedido el Consejo en su resolución 11/5 y su decisión 12/119. Se han programado otras consultas regionales, a saber: África (octubre de 2010), Asia y el Pacífico (noviembre de 2010) y Europa y otras regiones (febrero de 2011). En marzo-abril de 2011 se celebrará en Ginebra la serie final de consultas para consolidar las distintas perspectivas regionales en un solo informe. El propósito de las consultas es obtener las opiniones de diversas partes interesadas, incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones regionales, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, sobre la estructura y el contenido de las directrices con objeto de mejorarlas.

3. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organizó la consulta regional para América Latina y el Caribe en Santiago. El experto independiente desea agradecer a la CEPAL y al Alto Comisionado su interés en las consultas y el apoyo prestado.

4. Entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2010, el experto independiente participó en la 17ª reunión anual de los titulares de los mandatos sobre procedimientos

<sup>1</sup> Las directrices, que son de carácter voluntario, tienen por fin asegurar que las obligaciones de los Estados relacionados con la deuda y otras obligaciones financieras internacionales conexas no reduzcan su capacidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las directrices en su forma actual pueden consultarse en el sitio web del experto independiente (<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/debt/index.htm>).

especiales organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.

## II. El nexo entre la deuda y el comercio

### A. El comercio, la deuda y los derechos humanos

5. La relación entre el comercio y la deuda es sumamente compleja. Los beneficios del comercio influyen en la situación de la deuda externa de los países<sup>2</sup>; los ingresos generados por las exportaciones permiten hacer frente a la carga de la deuda externa. Como, en última instancia, las deudas deben financiarse con exportaciones, la disminución de los precios de las exportaciones aumenta el valor real de las deudas. Así, pues, se ha observado que “el aumento de las exportaciones tiene importancia fundamental para sostener la deuda externa”<sup>3</sup>.

6. La crisis de la deuda ha tenido su origen en un comportamiento irresponsable tanto con respecto a la concesión de préstamos como al endeudamiento excesivo de los países en desarrollo con cargo a sus ingresos futuros procedentes del comercio<sup>4</sup>. Los países más gravemente afectados por la crisis de la deuda fueron los que dependen de los productos básicos, en particular de un producto básico importante, como el cobre, el café o el cacao<sup>5</sup>. Hay una correlación entre el continuo empeoramiento de la deuda de los países de ingresos bajos y su dependencia de los productos básicos de exportación. Además, cuando la carga de la deuda es insostenible, también se reduce la capacidad de los países de atraer inversiones y, en consecuencia, de impulsar el crecimiento de sus economías y mejorar sus perspectivas comerciales.

7. También hay una relación entre la deuda y los derechos humanos. Como ha observado el experto independiente, la utilización, en los países en desarrollo fuertemente endeudados, de recursos destinados a financiar gastos en servicios públicos para pagar el servicio de la deuda constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible y la realización de los derechos humanos.

### B. La condicionalidad y el alivio de la deuda

8. La condicionalidad, es decir, la vinculación de la ayuda a la aplicación de determinadas políticas macroeconómicas por el país receptor, ha sido una característica dominante, aunque controvertida, de los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial desde hace más de dos décadas<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Véase Intervención de la Argentina sobre la relación entre comercio, deuda y finanzas en el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas de la Organización Mundial del Comercio (WT/WGTDF/W/33), 12 de septiembre de 2005.

<sup>3</sup> Véase Aldo Calíari (ed.), *Debt and Trade: Making Linkages for the Promotion of Development* (Geneva, South Centre/Centre of Concern, 2009), pág. 101.

<sup>4</sup> Ibid., pág. 113.

<sup>5</sup> En el período comprendido entre el comienzo de la crisis en 1980 y 1985, los precios de los productos básicos agrícolas bajaron un 25%, en tanto que los intereses que debían pagar esos países aumentaron bruscamente.

<sup>6</sup> Véase EURODAD, *Untying the knots: how the World Bank is failing to deliver real change on conditionality* (noviembre de 2007, disponible en [www.eurodad.org](http://www.eurodad.org)); Peter Hardstaff,

Algunas de las condiciones más comunes han sido la privatización de servicios públicos, como el abastecimiento de agua y la electricidad; el recorte de los gastos públicos (en muchos casos a expensas de la financiación de los servicios sociales básicos, incluidos los destinados a beneficiar a los pobres); la eliminación del personal redundante de la administración pública (el principal empleador en muchos países); la imposición de cargos a los usuarios de servicios básicos, como la enseñanza básica y la atención primaria de la salud, y la liberalización del comercio mediante la eliminación de las subvenciones y los aranceles a las importaciones.

9. En los decenios de 1980 y 1990, muchos países en desarrollo que se vieron gravemente afectados por la crisis de la deuda recurrieron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para obtener préstamos, con los que se imponían estrictas condiciones con respecto al ajuste fiscal y la aplicación de reformas de política con orientación de mercado (programas de ajuste estructural)<sup>7</sup>. Basados en lo que se ha descrito como “la confianza injustificada en el poder de los mercados financieros de autorreglamentarse”, esos programas en muchos casos entrañaban la liberalización del comercio y la desreglamentación y la liberalización de la cuenta de capital<sup>8</sup>. La crisis financiera reciente y la resultante recesión mundial han echado por tierra ese mito.

10. Si bien el FMI y el Banco Mundial sostienen que han revisado su enfoque de la condicionalidad, e incluso han reducido el número de condiciones impuestas a su financiación, hay estudios que indican que es poco lo que han cambiado sus prácticas en esa esfera<sup>9</sup>. Por ejemplo, en un estudio realizado en 2007 por la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD) sobre la base de datos del Banco Mundial, se comprobó que el Banco imponía un promedio de 37 condiciones por préstamo (13 de las cuales se consideraban de fuerza jurídica obligatoria)<sup>10</sup>. Sin embargo, a algunos países se imponía un número mucho mayor de condiciones. Por ejemplo, en relación con la subvención de apoyo a la lucha contra la pobreza

---

*Treacherous conditions: how IMF and World Bank policies tied to debt are undermining development* (Londres, World Development Movement, mayo de 2008), pág. 5: Fondo Monetario Internacional, FMI), *Trade Policy Conditionality in Fund-Supported Programmes* (Washington, D.C., FMI, 2001).

<sup>7</sup> Véase Melik Ozden, *Debt and human rights: consequences for human rights of the debt of the countries of the South and the current state of its treatment within the United Nations bodies* (Ginebra; CETIM, 2008), págs. 3 y 4.

<sup>8</sup> *World Economic and Social Survey 2010: Retooling Global Development* (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.10.II.C1), pág. 104.

<sup>9</sup> En 2002, el Fondo Monetario Internacional aprobó una serie de directrices (“Directrices sobre la condicionalidad”) según las cuales el Fondo se comprometía a reducir el número global de condiciones que aplicaba como parte de la condicionalidad estructural. De igual modo, en 2005, el Banco Mundial hizo un examen de sus prácticas en este ámbito y posteriormente aprobó cinco “principios sobre buenas prácticas” con el propósito de reducir el número general de condiciones que imponía a sus préstamos y asegurar que las que efectivamente se imponían estuvieran en conformidad con los planes de lucha contra la pobreza formulados por los países receptores y se basaran en ellos. No obstante, el Banco sigue imponiendo condiciones a sus préstamos en materia de política económica, como medidas de privatización y liberalización, que tienen profundas repercusiones. Véase EURODAD, *Untying the knots*, págs. 8 a 14. Véase también EURODAD, *World Bank and IMF conditionality: a development injustice* (2006); Benedicte Bull, Alf Morten Jerve and Erlend Sigvaldsen, *The World Bank's and the IMF's use of conditionality to encourage privatization and liberalization: current issues and practices*, informe preparado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega como documento de antecedentes para la Conferencia de Oslo sobre la Condicionalidad, SUM Report núm. 13 (Oslo, Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Universidad de Oslo, 2006).

<sup>10</sup> EURODAD, *Untying the knots*, pág. 9.

concedida a Rwanda en 2006 se impusieron a ese país 144 condiciones<sup>11</sup>. En un estudio en que se evaluaron 216 programas aprobados por el FMI en el período de 1995 a 2004, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI se comprobó que habían aumentado el número de condiciones estructurales impuestas por el Fondo y su injerencia en el proceso de formulación de políticas de los países receptores<sup>12</sup>. En abril de 2008, EURODAD señaló que desde que se habían aprobado las directrices sobre la condicionalidad, el FMI no había logrado reducir el número de condiciones estructurales impuestas a su financiación para el desarrollo y que el Fondo seguía aplicando extensamente condiciones que tienen profundas repercusiones, como la privatización y la liberalización<sup>13</sup>. Según EURODAD, la gran mayoría de los préstamos aprobados entre 2005 y 2008 con cargo al Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, incluía condiciones de liberalización o privatización<sup>14</sup>.

11. El FMI y el Banco Mundial siguen imponiendo condiciones en materia de políticas, incluida la privatización y la liberalización del comercio y los sectores financieros a los préstamos y los mecanismos para el alivio de la carga de la deuda.

12. Con arreglo a la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME), los países que reúnen los requisitos para el alivio de la deuda deben

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Oficina de Evaluación Independiente, “Evaluación de la OEI sobre la condicionalidad estructural de los programas respaldados por el FMI”, 27 de noviembre de 2007. Puede consultarse en <http://www.ieo-imf.org/eval>. El FMI impone dos tipos diferentes de condiciones normativas en los préstamos otorgados a los países pobres: condiciones cuantitativas y condiciones estructurales. Las condiciones cuantitativas imponen a los gobiernos de los países pobres una serie de objetivos macroeconómicos que determinan, por ejemplo, la cuantía del déficit fiscal que puede tener un gobierno o la cuantía del crédito interno permitido. Las condiciones estructurales requieren la aplicación de reformas de política institucional y legislativa; incluyen medidas tales como la reforma del comercio, la liberalización de los precios y la privatización.

<sup>13</sup> Nuria Molina y Javier Pereira, *Critical conditions: the IMF maintains its grip on low-income Governments* (EURODAD, abril de 2008), págs. 4 y 5. El estudio se basa en una evaluación de los préstamos otorgados por el FMI con cargo al Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza entre enero de 2003 y diciembre de 2007 para 35 países de distintas regiones. Se trata de préstamos que el FMI concede a los países de ingreso bajo sobre la base de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) de los países receptores.

<sup>14</sup> Molina y Pereira, *Critical conditions*, págs. 4 y 5.

cumplir determinadas condiciones en los puntos de decisión y de culminación<sup>15</sup>. Para llegar al punto de decisión, los países deben haber acumulado un historial de estabilidad macroeconómica y contar con un plan nacional de lucha contra la pobreza (documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)). Este requisito no sólo se aplica a los PPME sino a todos los países que reciben préstamos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en condiciones favorables. En los DELP se establece un vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza: son informes de los países deudores sobre las políticas y programas macroeconómicos y sociales que deben aplicar de acuerdo con sus respectivas estrategias de crecimiento y lucha contra la pobreza. En ellos también se esbozan los requisitos para recibir financiación externa y se indican las fuentes de esa financiación. Los DELP son aprobados por el Banco Mundial y el FMI.

13. Normalmente los DELP exigen la privatización de los servicios públicos (agua, electricidad, etc.), a veces denominada “reforma del sector público”<sup>16</sup>, la desreglamentación, la eliminación de subvenciones (incluso las que benefician a los pobres), el fomento de las exportaciones y las inversiones extranjeras y la liberalización del comercio. Según el FMI, “un crecimiento económico sostenido que favorezca a los pobres, basado en un aumento vigoroso de la actividad y la inversión del sector privado será la piedra fundamental de la estrategia de lucha contra la pobreza. El Fondo seguirá prestando asesoramiento y apoyo en materia de políticas con ese fin, que han de incluir una gestión macroeconómica prudente, mercados libres y más abiertos y un entorno estable y previsible para la actividad del sector privado ... Es necesario que los donantes, que tienen sus propias ideas en materia de prioridades y posibilidades de financiación, participen activamente en

<sup>15</sup> La Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME) fue puesta en marcha por el Banco Mundial y el FMI en 1996 para reducir la carga de la deuda de los países pobres fuertemente endeudados que se habían comprometido a introducir reformas con miras a promover un desarrollo económico sostenible, la estabilidad macroeconómica y la reducción de la pobreza. Esa iniciativa se reforzó en 1999 para prestar una asistencia más sustancial para el alivio de la carga de la deuda. Para recibir asistencia con arreglo a la Iniciativa, los países deben cumplir las condiciones siguientes: a) los indicadores de la carga de la deuda deben ser superiores a los umbrales establecidos en la Iniciativa utilizando los datos más recientes correspondientes al año inmediatamente anterior al punto de decisión; b) los países deben haber acumulado un historial satisfactorio en lo que respecta a la aplicación de políticas de acuerdo con los respectivos programas que reciben apoyo del FMI y la AIF, y c) deben haber formulado una estrategia para la reducción de la pobreza. En junio de 2005, la Iniciativa a favor de los PPME se complementó con la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, cuya finalidad era prestar asistencia adicional para aliviar la carga de la deuda y de ese modo acelerar el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A simple vista, esta última iniciativa permite prestar asistencia para aliviar la carga del 100% de las deudas contraídas con el Fondo Monetario Internacional, la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y el Fondo para el Desarrollo de África por los países que participan en la Iniciativa en favor de los PPME. El Banco Interamericano de Desarrollo se sumó a la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral en marzo de 2007 y decidió prestar una asistencia análoga a cinco PPME de América Latina y el Caribe. Véase FMI, Factsheet: Debt Relief under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, 18 de febrero de 2010.

<sup>16</sup> Según EURODAD, las condiciones que el Banco Mundial considera que son “reformas del sector público” suelen ser condiciones que crean un entorno jurídico y normativo propicio a la privatización. Véase EURODAD, *Untying the knots*, pág. 13.



ese proceso”<sup>17</sup>. En resumidas cuentas, los DELP son análogos a los programas de ajuste estructural, que han sido duramente criticados.

14. Para llegar al punto de culminación, los países deben mantener la estabilidad macroeconómica, efectuar reformas estructurales y aplicar una estrategia de lucha contra la pobreza que el FMI y el Banco Mundial consideren satisfactoria.

15. El proceso de los DELP ha sido objeto de críticas en relación con las cuestiones de la participación de la sociedad civil y el control de los países. Se ha afirmado que en varios países la sociedad civil no ha tenido una participación eficaz en la formulación de planes de reducción de la pobreza ni se han considerado debidamente otras alternativas<sup>18</sup>. También se ha afirmado que es falsear la verdad decir que los países controlan los DELP cuando éstos están sujetos a la aprobación de los directorios del FMI y el Banco Mundial. Además, se ha opinado que incluso si los DELP omitieran las referencias a las políticas de privatización y liberalización, el FMI y el Banco Mundial podrían imponerlas de todos modos por conducto del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza y los créditos de apoyo a la reducción de la pobreza, respectivamente<sup>19</sup>.

16. El efecto negativo de las políticas de ajuste estructural (y la pesada carga de la deuda) en la prestación de servicios básicos, de protección de los derechos humanos y servicios sociales conexos, así como su contribución al aumento de la pobreza y la marginalización de los pobres en los países en desarrollo que se han visto obligados a aplicar esas políticas, está ampliamente documentado<sup>20</sup>.

17. La condicionalidad no es eficaz<sup>21</sup>, socava el control del país y reduce su margen de acción en materia de políticas, así como la capacidad de los gobiernos de adoptar reglamentaciones que benefician a los grupos vulnerables y los favorezcan en sus programas de desarrollo. Al transferir la capacidad de adoptar decisiones de política de gobiernos soberanos a funcionarios de organizaciones donantes que no han sido elegidos por voluntad popular, la condicionalidad reduce la responsabilidad de los gobiernos para con sus ciudadanos y contraviene las normas aceptadas de

<sup>17</sup> FMI, *The Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF): Operational Issues* (Washington, D.C., FMI, 1999).

<sup>18</sup> Véase, por ejemplo, T. Bierschenk, E. Thioleron y N. Bako-Arifari, “Benin”, R. Jenkins y M. Tsoka, “Malawi”, I. Dante, J. Gaultier, M. Marouani y M. Raffinot, “Mali”, H. Falck, K. Landfald y P. Rebelo, “Mozambique”, A. Evans y E. Ngalwea, “Tanzania”, *Development Policy Review*, vol. 21, núm. 2, (2003).

<sup>19</sup> Hardstaff, *Treacherous conditions* (véase la llamada 6), pág. 10.

<sup>20</sup> Véase, por ejemplo, E/1990/5/Add.48, 2001, párrs. 3 y 35; CEDAW/C/CMR/1; CRC/C/65/Add.18, 2002, párr. 382; CRC/C/3/Add.62, párrs. 121, 134 y 457; CRC/C/KEN/2, párr. 30; E/C.12/KEN/1, párrs. 6 y 90; CRC/C/70/Add.18, párr. 67; E/C.12/BOL/2, párrs. 2 y 372; CRC/C/65/Add.2, párrs. 35, 36 y 124; E/1990/5/Add.40, párrs. 6, 36 y 170; CEDAW/C/HON/6, párr. 350; CRC/C/65/Add.28, párr. 53; E/C.12/IND/5, párr. 4; CRC/C/70/Add.17, párrs. 128 y 144; CRC/C/65/Add.30, párrs. 36 y 37; CEDAW/C/BRA/1 a 5; E/CN.4/2001/53, E/CN.4/2006/44, E/CN.4/2002/59 y E/CN.4/2001/52. Véase también Hardstaff, *Treacherous conditions*, pág. 5.

<sup>21</sup> Es interesante señalar que en una evaluación del FMI de 2007, la Oficina de Evaluación Independiente indica que la condicionalidad no promueve cambios sostenibles de política ni ayuda a los gobiernos a alcanzar las metas de reducción de la pobreza convenidas con el FMI, y llega a la conclusión de que “la condicionalidad debe limitarse a las esferas básicas de especialización del FMI”. Oficina de Evaluación Independiente del FMI, “Evaluación de la OEI sobre la condicionalidad estructural de los programas respaldados por el FMI”, 27 de noviembre de 2007.

buena gobernanza, cuyo cumplimiento las propias instituciones financieras internacionales exigen en muchos casos a los países en desarrollo. También se opone a la declaración, en el Consenso de Monterrey<sup>22</sup>, de que “cada país es el principal responsable de su desarrollo económico y social, y nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo” (párr. 6). En el Consenso también se hace hincapié en “la necesidad de que las instituciones financieras multilaterales, al prestar asesoramiento sobre cuestiones normativas y apoyo financiero, tomen como base los planes de reforma que estén bien fundados y con los cuales se hayan identificado los países respectivos, que tengan en cuenta las necesidades de los pobres e incluyan medidas para reducir la pobreza; asimismo, esas instituciones deben tomar debidamente en consideración las necesidades especiales y la capacidad de ejecución de los países en desarrollo y los países con economías en transición, con miras a fomentar el crecimiento económico y un desarrollo sostenible”. Se subraya además que al prestar “ese asesoramiento deben tenerse presentes los costos sociales de los programas de ajuste, que deberían diseñarse de manera de reducir al mínimo sus repercusiones negativas en los segmentos vulnerables de la sociedad” (párr. 56).

18. Cabe señalar que desde el punto de vista de los derechos humanos, la reglamentación es un deber: las normas de derechos humanos exigen que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole apropiadas para la realización de esos derechos<sup>23</sup>.

### C. La liberalización del comercio como condición del alivio de la carga de la deuda

19. No sólo se siguen aplicando condiciones normativas de liberalización del comercio a los nuevos préstamos, sino que también su aplicación es una característica clave de la asistencia para aliviar la carga de la deuda. Por ejemplo, en un estudio de los documentos de 26 países relativos al punto de decisión con arreglo a la Iniciativa para los PPME se observó que en todos se mencionaba un programa de privatización previo y un proceso de privatización en curso o previsto para el futuro. En 15 de ellos se mencionaba expresamente la proyectada privatización de servicios públicos o básicos como el suministro de energía, telecomunicaciones, agua y transporte; en 23 se hacía referencia a las medidas ya adoptadas para

<sup>22</sup> Véase *Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey (México), 18 a 22 de marzo de 2002* (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo.

<sup>23</sup> Véase, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2 1). Si bien en ciertas normas sobre el comercio, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), se reconoce el derecho de los miembros de la OMC “a reglamentar el suministro de servicios en su territorio y a establecer nuevas reglamentaciones al respecto, con el fin de realizar los objetivos de su política nacional”, así como la especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer ese derecho, su invocación en la práctica está plagada de dificultades porque muchas de las obligaciones contempladas en el AGCS no están claramente definidas. También cabe mencionar que los miembros de la OMC pueden establecer reglamentaciones sólo en la medida en que esas reglamentaciones no sean incompatibles con sus obligaciones en el marco de la OMC. Véase Caroline Dommen, “The WTO, international trade and human rights”, en Michael Windfuhr (ed.), *Mainstreaming Human Rights in Multilateral Institutions* (2004). Puede consultarse en [http://www.3dthree.org/pdf\\_3D/WTOmainstreamingHR.pdf](http://www.3dthree.org/pdf_3D/WTOmainstreamingHR.pdf).

liberalizar el comercio y en 11 se indicaba que el proceso de liberalización del comercio seguía en marcha<sup>24</sup>.

20. En los países productores de café, como Côte d'Ivoire, Etiopía, Kenya y Uganda, el Banco Mundial y el FMI han aconsejado o exigido a los Gobiernos que liberalicen el sector del café<sup>25</sup>. Esa liberalización ha incluido medidas como la eliminación de los controles de la oferta y los precios, el desmantelamiento de las empresas comerciales del Estado y la promoción del aumento de la producción y las exportaciones. En 1998 se exigió a Côte d'Ivoire, como condición del alivio de la carga de la deuda con arreglo a la Iniciativa para los PPME, la plena liberalización del sector del café en la temporada agrícola de 1998/99 a más tardar<sup>26</sup>. En un segundo proyecto de apoyo a los servicios agrícolas nacionales financiado por el Banco Mundial se hacía hincapié en el requisito de liberalizar plenamente el sector del café<sup>27</sup>.

21. Ese asesoramiento sobre políticas y esa condicionalidad aparentemente no tienen en cuenta las consecuencias del fomento de la producción y las exportaciones recomendado por el FMI y el Banco Mundial en otras partes del mundo. Entre 1998 y 2001, el exceso de la oferta en los mercados causó la caída de los precios y desencadenó una crisis en los países productores de café<sup>28</sup>. Esa situación puede dar lugar a una reducción de la asistencia para el alivio de la carga de la deuda que reciben los países en última instancia.

#### **D. Consecuencias de la liberalización del comercio en la deuda y los derechos humanos**

22. La liberalización del comercio puede tener un efecto positivo en la capacidad de las economías de sufragar el servicio de la deuda, ya que puede ampliar las fuentes de divisas, como las exportaciones netas y las inversiones extranjeras directas<sup>29</sup>. Pero esto no es lo que ocurre en todos los casos. Por ejemplo, cuando un país depende en gran medida de la exportación de productos básicos primarios, la liberalización progresiva del comercio exige que se reduzcan o eliminen las importaciones y los aranceles a la exportación, y puede surgir la necesidad de cubrir el déficit fiscal resultante con un aumento de los préstamos, con lo cual aumenta la carga de la deuda de ese país.

23. En muchos casos se parte del supuesto de que hay una correlación positiva entre la liberalización del comercio y el desarrollo económico en los países de ingresos bajos. Sin embargo, en muchos de esos países la liberalización no ha generado, como se pensaba, un aumento de las tasas de crecimiento o una mayor integración internacional. Es más, la liberalización del comercio en realidad puede obstaculizar el desarrollo en los países que tienen obligaciones pendientes en

<sup>24</sup> Hardstaff, *Treacherous conditions* (véase la llamada 6), pág. 7.

<sup>25</sup> Ibid, pág. 13.

<sup>26</sup> Banco Mundial, *Côte d'Ivoire decision point document*, 6 de marzo de 1998.

<sup>27</sup> Banco Mundial, *second national agricultural services support project, project appraisal document*, 23 de junio de 1998.

<sup>28</sup> Banco Mundial, "Ethiopia: developing exports to promote growth", informe sectorial, 25 de abril de 2002.

<sup>29</sup> "Impact of trade liberalization on external debt burden: econometric evidence from Pakistan" ([http://mpira.ub.uni-muenchen.de/9548/1/MPRA\\_paper\\_9548.pdf](http://mpira.ub.uni-muenchen.de/9548/1/MPRA_paper_9548.pdf)).

concepto de deuda externa, y vulnerar el derecho humano al desarrollo. Como se ha señalado en un informe reciente, la liberalización del comercio ha restringido progresivamente el margen que tienen los países en desarrollo para aplicar políticas comerciales que promuevan el desarrollo económico<sup>30</sup>.

24. Además de no generar el crecimiento económico y el desarrollo previstos en muchos países pobres fuertemente endeudados, la liberalización del comercio ha repercutido negativamente en la realización de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo en esos países. Es más, se siguen imponiendo condiciones tales como la liberalización del comercio y la privatización a los préstamos o al alivio de la carga de la deuda, cuando los datos históricos disponibles demuestran que esas políticas no han dado buenos resultados. En 2002, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló que la rápida y amplia liberalización del comercio emprendida por los países menos adelantados en el decenio de 1990 no sólo no había beneficiado a los pobres sino que en realidad había contribuido a un aumento del desempleo, la desigualdad salarial y la pobreza<sup>31</sup>.

25. En Tanzania, se exigió la privatización de los servicios de abastecimiento de agua en Dar es Salaam como condición de la cancelación de la deuda. Su resultado fue una drástica reducción del acceso al abastecimiento de agua para los sectores más pobres de la población, como consecuencia de la reducción de los servicios y el aumento de las tarifas<sup>32</sup>. En Malawi, la liberalización del sector agropecuario mediante la reducción de las subvenciones a los pequeños agricultores, la eliminación de los controles de precios y la reestructuración y privatización del organismo nacional de comercialización agrícola condujo a un aumento de los precios y del acaparamiento de cereales y a la falta de alimentos de precio accesible para los pobres, con lo cual se redujo la seguridad alimentaria de la mayoría de la población<sup>33</sup>.

26. El hecho de que se exija a los países en desarrollo la eliminación de las subvenciones a la agricultura pone de relieve las contradicciones que existen en la gobernanza de la economía mundial. Los países desarrollados otorgan enormes subvenciones a sus sectores agrícolas, dando así a sus agricultores una ventaja injusta en el costo de la producción, que les permite cobrar precios más bajos para los productos que compiten con los productos agrícolas no subvencionados de los países en desarrollo<sup>34</sup>. Esta distorsión del mercado ocurre principalmente en el sector de los productos básicos, como el algodón, el arroz, las hortalizas y otros productos agrícolas de los que dependen muchos países en desarrollo pobres. Cuando se limita la producción y las oportunidades de ingreso de los agricultores en

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), *Least Developed Countries Report 2002: Escaping the Poverty Trap* (Ginebra, UNCTAD, 2002); UNCTAD, *Economic Development in Africa – From Adjustment to Poverty Reduction: What's New?* (Ginebra, UNCTAD, 2002).

<sup>32</sup> Véase Jubilee Debt Campaign, *Debt and Women*, nota informativa, 2007.

<sup>33</sup> K. Owusu y F. Ng'ambi, *Structural damage: the causes and consequences of Malawi's food crisis* (London, World Development Movement, 2002). Puede consultarse en <http://www.wdm.org.uk/campaign/resource.htm#reports>.

<sup>34</sup> Desde 2001, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Japón y el Canadá han gastado en conjunto más de 750.000 millones de dólares en subvenciones a la agricultura. Véase *The DATA Report 2008*, págs. 66 y 67.

los países en desarrollo, las subvenciones otorgadas por los países desarrollados amenazan los medios de vida de los productores locales y, en consecuencia, su derecho a un nivel de vida digno<sup>35</sup>.

27. Los datos disponibles indican que en muchos casos la liberalización del comercio ha tenido efectos particularmente perniciosos en la situación de la mujer. Ello constituye una violación del principio de no discriminación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado que la no discriminación en el contexto del comercio consiste no sólo en proteger a las personas y los grupos contra la discriminación abierta sino en asegurar que no se excluya a determinadas personas y grupos de la actividad comercial<sup>36</sup>.

28. En muchos casos, las políticas de liberalización del comercio impuestas a los países en desarrollo desde mediados del decenio de 1980 han tenido consecuencias catastróficas para esos países. Como ha observado una organización no gubernamental, esas políticas han dejado un legado de pobreza y desempleo<sup>37</sup>. En síntesis, la liberalización del comercio ha tenido efectos diametralmente opuestos a las metas de la Organización Mundial del Comercio de “elevar los niveles de vida” y promover un “desarrollo sostenible”<sup>38</sup>.

29. Por último, es importante observar que la idea de que los aparentes efectos positivos de la liberalización del comercio compensarían sus efectos negativos en esos segmentos de la población —al producir aumentos netos del bienestar que deberían beneficiar a toda la población en su conjunto por conducto de las políticas de redistribución— no concuerdan con una perspectiva de derechos humanos, que se centra en los más vulnerables; no se ha corroborado empíricamente que sea siempre correcta y con mucha frecuencia se sobreestima la capacidad de los Estados del mundo en desarrollo de gestionar esa redistribución de los beneficios<sup>39</sup>.

## E. Sostenibilidad de la deuda: definición, análisis y crítica

30. Por “sostenibilidad” de la deuda suele entenderse la capacidad de un país de cumplir sus obligaciones en concepto de servicio de la deuda sin necesitar ayuda para aliviar esa carga o sin atrasarse en los pagos<sup>40</sup>.

31. En abril de 2005, el FMI y el Banco Mundial establecieron un Marco conjunto de sostenibilidad de la deuda para los países de ingreso bajo “para guiar las decisiones de esos países sobre la toma de préstamos de manera tal que las

<sup>35</sup> Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Human Rights and Trade*, documento preparado para la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Cancún (México), en septiembre de 2003. Puede consultarse en [www.2.ohchr.org](http://www.2.ohchr.org), *World Economic and Social Survey 2010* (véase la llamada 8), pág. xvi; Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, *Por una globalización justa: crear oportunidades para todos* (OIT, 2004), párrs. 374 y 375.

<sup>36</sup> Véase E/CN.4/Sub.2/2003/9.

<sup>37</sup> War on Want, *Trading Away Our Jobs: How free trade threatens employment around the world* (marzo de 2009), pág. 5 (puede consultarse en [www.waronwant.org](http://www.waronwant.org)).

<sup>38</sup> Véase *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio*, anexo 1A, 33.I.L.M. 1153 (1994).

<sup>39</sup> A/HRC/10/5/Add.2 (2009).

<sup>40</sup> Véase un análisis detallado de la sostenibilidad de la deuda en EURODAD, *To Repay or to Develop? Handbook on Debt Sustainability* (abril de 2006).

necesidades de financiamiento tengan coherencia con la capacidad de reembolso actual y futura, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno”<sup>41</sup>. Otro propósito de ese marco es guiar las decisiones de los acreedores en materia de concesión de préstamos y subvenciones para asegurar que se suministren recursos a los países de ingreso bajo en condiciones compatibles con su avance hacia sus metas de desarrollo y la sostenibilidad de la deuda a largo plazo”<sup>42</sup>. Las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda se emplean para determinar el acceso a la financiación del FMI y la proporción de subvenciones y préstamos que ha de incluir la asistencia del Banco Mundial a cada país de ingreso bajo.

32. Las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda realizadas por el Banco Mundial y el FMI con arreglo a ese marco consisten en análisis de la carga de la deuda prevista de un país durante un período de 20 años y su vulnerabilidad a perturbaciones exógenas y a cambios drásticos de política; una evaluación del riesgo de que el nivel de endeudamiento cause dificultades graves en ese período sobre la base de valores indicativos de la carga de la deuda que dependen de la calidad de las políticas e instituciones del país, y recomendaciones sobre una estrategia para la obtención y concesión de préstamos que limita dicho riesgo. El riesgo que el nivel de endeudamiento cause dificultades se clasifica en cuatro categorías, a saber: a) riesgo bajo: todos los indicadores del endeudamiento son mucho más bajos que los valores de umbral fijados; b) riesgo moderado: los indicadores de la carga de la deuda son inferiores a los valores de umbral en la hipótesis de referencia, pero las pruebas de resistencia indican que esos valores pueden sobrepasarse si se producen perturbaciones externas o cambios abruptos en la política macroeconómica; c) riesgo alto: la hipótesis de referencia indica la posibilidad de que los valores de umbral del nivel de endeudamiento o del servicio de la deuda se excedan por periodos prolongados, pero el país no tiene por el momento ninguna dificultad para reembolsar los préstamos, y las hipótesis alternativas o las pruebas de resistencia también indican que ese riesgo está cubierto, y d) dificultades graves debido al nivel de endeudamiento: el país tiene dificultades para reembolsar los préstamos.

33. El concepto de sostenibilidad de la deuda del FMI y el Banco Mundial ha sido objeto de duras críticas por muchos de los que propugnan el alivio de la deuda, porque ese concepto parece referirse únicamente a la capacidad de un país de financiar sus deudas con ingresos de exportación y, en menor medida, con ingresos públicos, sin tener debidamente en cuenta otras necesidades que es preciso atender con esos recursos. Además, los coeficientes no tienen en cuenta determinadas características políticas e institucionales que influyen en la capacidad de reembolso de la deuda. Dicho de otro modo, las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda con arreglo al Marco están centradas casi exclusivamente en la capacidad de los países deudores de pagar sus deudas. No tienen en cuenta la capacidad de los países de atender las necesidades básicas de sus poblaciones en materia de alimentación,

<sup>41</sup> Fondo Monetario Internacional, *Ficha técnica: El Marco de sostenibilidad de la deuda elaborado por el Banco Mundial y el FMI para los países de ingreso bajo*, marzo de 2010. Puede consultarse en <http://imf.org/dsa>.

<sup>42</sup> En 2006, el Comité Monetario y Financiero Internacional de la junta de Gobernadores del FMI declaró que “el marco de sostenibilidad de la deuda ... es el instrumento primordial que utilizaban los prestatarios y los acreedores para ... formular prácticas coherentes de financiamiento, e insta a todos los acreedores y prestatarios a utilizar al tomar sus decisiones de financiamiento y de préstamos”. Véase Comunicado del Comité Monetario y Financiero Internacional (2006), párr. 13.



abastecimiento de agua apta para el consumo, vivienda, educación y salud. Por lo tanto, esas evaluaciones del FMI y el Banco Mundial hacen caso omiso de la obligación primordial de los Estados, desde el punto de vista de los derechos humanos, de satisfacer las necesidades sociales básicas de sus poblaciones. Por esa razón, se ha opinado que las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda deberían incluir “una evaluación del nivel de ingresos que desde una perspectiva realista pueda recaudar un gobierno sin agudizar la pobreza ni comprometer el desarrollo futuro del país”<sup>43</sup>.

## F. Sostenibilidad de la deuda: el papel del comercio

34. Los países pobres muy endeudados tienen grandes dificultades para integrarse en el comercio mundial debido a la falta de acceso a los mercados de capitales privados, a la deuda pendiente y al empeoramiento de su relación de intercambio<sup>44</sup>. La evaluación de las transferencias corrientes de capitales privados y la exportación de servicios de los países que han llegado al punto de culminación con arreglo a la Iniciativa en favor de los PPME revela que esos países siguen dependiendo de las exportaciones de productos básicos y siguen siendo vulnerables a las perturbaciones que afectan a su relación de intercambio<sup>45</sup>. Sus exportaciones siguen siendo endebles: están constituidas en su mayor parte por productos básicos, y las exportaciones de manufacturas son limitadas. Además, en varios países que han llegado al punto de culminación, han estado dominadas casi siempre por sólo uno o dos productos básicos. Esa reducida base de exportaciones ha hecho que estos países estén particularmente expuestos a los trastornos que afectan a la relación de intercambio<sup>46</sup>. En particular, los países con una base limitada de exportaciones tienden a ser más vulnerables a los trastornos.

35. Se ha comprobado que las proyecciones de las exportaciones presentadas por el FMI y el Banco Mundial como parte de sus evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda en muchos casos han resultado ser excesivamente optimistas. En otras palabras, se sobreestima la relación deuda-exportaciones, y surge así la posibilidad de que el volumen de exportaciones sea inferior al previsto. Según un investigador, el hecho de que el margen de error en las proyecciones sea aún mayor en los países sujetos a la supervisión del Fondo parece indicar que las políticas monetarias, fiscales y cambiarias que promueve el FMI no crean un entorno económico que pueda generar coeficientes de endeudamiento estables y sostenibles como los previstos en las hipótesis en que se basan sus proyectos<sup>47</sup>. Esas hipótesis

<sup>43</sup> New Economics Foundation, *Debt relief as if justice mattered* (London, New Economics Foundation, 2008), pág. 11.

<sup>44</sup> Marc Auboin, *The Trade, Debt and Finance Nexus: At the Cross-roads of Micro- and Macroeconomics*, WTO Discussion Paper. Puede consultarse en [http://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/discussion\\_papers6\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_papers6_e.pdf).

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Yan Sun, *External Debt Sustainability in HIPC Completion Point Countries*, IMF Working Paper No. WP/04/160 (septiembre de 2004). Puede consultarse en <http://ssrn.com/abstract=878985>.

<sup>47</sup> Yilmaz Akyüz, *Debt Sustainability in Emerging Markets: A Critical Appraisal*, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Documento de trabajo núm. 61 (ST/ESA/2007/DWP/61), noviembre de 2007, pág. 12.

excesivamente optimistas sobre el crecimiento económico están basadas en proyecciones de las inversiones privadas y las exportaciones que no son realistas<sup>48</sup>.

36. Las hipótesis erróneas en que se basan las evaluaciones de la sostenibilidad del FMI han sido confirmadas por la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI, según la cual hay datos disponibles que confirman que la cuantía de las inversiones en los programas a los que presta apoyo el FMI se sobreestima prácticamente en todos los casos<sup>49</sup>.

37. Según un estudio de 16 países que participaron en la Iniciativa a favor de los PPME, realizado por el Brooks World Poverty Institute, el valor actual medio, en cifras netas, del servicio de la deuda externa en relación con el valor medio de las exportaciones de esos países, calculado teniendo en cuenta la asistencia prestada en 2004 con arreglo a la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, aumentará inicialmente del 22% en 2004 al 176% en 2015 y llegará al 242% en 2026<sup>50</sup>. En el estudio se llega a la conclusión de que el aumento de las exportaciones tiene importancia crítica para que los países que han participado en la Iniciativa a favor de los PPME mantengan niveles sostenibles de endeudamiento<sup>51</sup>.

38. Como ha observado el experto independiente en su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/11/10, párr. 84), el hecho de que el nivel de endeudamiento de varios países que han participado en la Iniciativa en favor de los PPME haya aumentado después del alivio de la deuda como consecuencia del desplome de los precios de sus exportaciones (en particular en el contexto de la reciente recesión mundial) pone de manifiesto que hay una vinculación entre la relación de intercambio y la acumulación de la deuda. Por consiguiente, como se destaca en el Consenso de Monterrey, en la etapa de culminación de la Iniciativa en favor de los PPME, es necesario considerar en los análisis de la sostenibilidad de la deuda “si las perspectivas de crecimiento mundial y las relaciones de intercambio” han empeorado (párr. 49).

## **G. Enfoque de la sostenibilidad de la deuda basado en los derechos humanos<sup>52</sup>**

39. Es evidente que el concepto de sostenibilidad de la deuda del FMI y el Banco Mundial es muy limitado y poco contribuye a la consecución de los objetivos de reducción de la pobreza que se pretenden alcanzar aliviando la carga de la deuda. Por esa razón, se han hecho llamamientos en distintos niveles para que ese concepto

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Oficina de Evaluación Independiente, *Fiscal Adjustment in IMF-Supported Programmes* (Washington D.C., IMF, 2003), pág. 4.

<sup>50</sup> Jacinta Nwachukwu, “The Prospects for Foreign Debt Sustainability in Post-Completion Point Countries: Implications of the HIPC-MDRI Framework, Brooks World Poverty Institute Working Paper No. 26 (Manchester, Brooks World Poverty Institute, University of Manchester, febrero de 2008), pág. 12.

<sup>51</sup> Ibid, pág. 19.

<sup>52</sup> Véase un análisis del enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en los derechos humanos en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo* (Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2006).



se revise a fin de asegurar el logro de un desarrollo humano sostenible y la realización de los derechos humanos<sup>53</sup>.

40. Como punto de partida, cabe señalar que en el Consenso de Monterrey se pedía que “en los análisis futuros de sostenibilidad de la deuda, también se debería tener en cuenta cuánto influye el alivio de la carga de la deuda en el avance en el logro de las metas de desarrollo de la Declaración del Milenio” y se hacía hincapié en que era “necesario mantener en estudio los métodos de cálculo y las hipótesis en que se basan los análisis de la sostenibilidad de la deuda” (párr. 49).

41. En su informe titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” (A/59/20050), el Secretario General señaló que se debería “redefinir la sostenibilidad de la deuda como el nivel de deuda que permite a un país lograr los objetivos de desarrollo del Milenio y llegar a 2015 sin que aumente su relación de endeudamiento” (párr. 54).

42. Muchas organizaciones no gubernamentales y varias organizaciones intergubernamentales están a favor de un enfoque de la sostenibilidad de la deuda basado en el desarrollo humano, según el cual la deuda debería pagarse utilizando únicamente los recursos residuales con que cuenta un gobierno una vez que ha financiado sus gastos prioritarios, incluidos los relacionados con los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. Por ejemplo, EUODAD considera que el concepto de sostenibilidad de la deuda debería redefinirse como el nivel de endeudamiento que permite a los países alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 sin que aumente su coeficiente de endeudamiento<sup>54</sup>.

43. Un enfoque de la sostenibilidad de la deuda basado en el desarrollo humano exige dar primacía a las prioridades en materia de desarrollo humano no sólo en las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda sino también en las medidas de política que se adopten con respecto al problema de la deuda<sup>55</sup>. Por consiguiente, de acuerdo con ese enfoque, se debe asignar importancia primordial a las necesidades de desarrollo humano tanto en relación con la sostenibilidad de la deuda como en la formulación y aplicación de todas las políticas económicas internacionales. También es preciso asegurar que los afectados por la deuda puedan participar en su gestión.

44. El experto independiente apoya las propuestas encaminadas a redefinir el concepto de sostenibilidad de la deuda para tener en cuenta los imperativos del desarrollo humano. No obstante, considera que los análisis de la sostenibilidad de la deuda deberían incluir una evaluación del nivel de deuda que puede sostener un gobierno sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos (véase A/64/289 y Corr.1). Un enfoque basado en los derechos humanos tiene una utilidad concreta, ya que hace hincapié en los principios de participación, responsabilidad, transparencia, no discriminación y en la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Cabe señalar

<sup>53</sup> En 2006, el Banco Mundial abandonó su examen del concepto de sostenibilidad porque “sería costoso para los donantes”. Véase Asociación Internacional de Fomento, *Review of Low-Income Country Debt Sustainability and Implications for the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)* (Washington, D.C., Banco Mundial, 2006).

<sup>54</sup> EUODAD. Véase también CIDSE, *The New World Bank/IMF Debt Sustainability Framework – A Human Development Assessment* (abril de 2006).

<sup>55</sup> Aldo Caliarí, *The Debt Sustainability Framework: How the Bretton Woods Institutions managed to subvert the human development grounds for debt relief*. Puede consultarse en [http://www.newscentre.bham.ac.uk/debtrelief/Birmingham\\_Full\\_Paper\\_2\\_.pdf](http://www.newscentre.bham.ac.uk/debtrelief/Birmingham_Full_Paper_2_.pdf).

también que hay estrechos vínculos entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los derechos humanos. Además, los derechos humanos son pertinentes para la consecución de resultados más duraderos y equitativos en materia de desarrollo.

45. Un enfoque basado en los derechos humanos que estableciera una correlación entre la deuda y el comercio aseguraría que los recursos procedentes tanto del alivio de la carga de la deuda como de un aumento del comercio se destinaran en primer lugar a la realización de esos derechos. A este respecto, es importante recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (art. 25) y que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan efectivos” (art. 28).

46. En opinión del experto independiente, la inclusión de los derechos humanos en los análisis de la sostenibilidad de la deuda está en concordancia con el principio ampliamente aceptado de que las organizaciones internacionales tienen obligaciones con arreglo al derecho internacional, incluidas las emanadas de la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de derechos humanos<sup>56</sup>. Por ejemplo, en 2003, el ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) pidió a la Corporación que “tuviera en cuenta de manera sistemática los riesgos para los derechos humanos en los proyectos, tomara medidas apropiadas para reducirlos y proporcionara directrices más claras a sus clientes sobre estos dos aspectos”<sup>57</sup>. En 2006, el Consejero Jurídico del Banco Mundial declaró que el Convenio Constitutivo del Banco le permite, y en algunos casos le exige que reconozca las dimensiones de sus políticas y actividades de desarrollo relacionadas con los derechos humanos<sup>58</sup>. Por lo tanto, específicamente en relación con el FMI y el Banco Mundial, cabe considerar que los argumentos de que sus convenios constitutivos excluyen la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos o de que dichas organizaciones no tienen ninguna obligación con respecto a esos derechos humanos carecen de fundamento.

<sup>56</sup> Véase, por ejemplo, A. Clapham, *Human Rights Obligations of Non-State Actors* (Oxford, Oxford University Press, 2006), págs. 137 a 159; C. Lumina, “An assessment of the human rights obligations of the World Bank and the International Monetary Fund with particular reference to the World Bank’s Inspection Panel,” *Journal for Juridical Science*, vol. 31, núm. 2 (2006), págs. 108 a 129; August Reinisch, “The Changing International Legal Framework for Dealing with Non-State Actors,” en P. Alston (ed.), *Non-State Actors and Human Rights* (Oxford, Oxford University Press, 2005); M. Darrow, *Between Light and Shadow: the World Bank, the International Monetary Fund and International Human Rights Law* (Oxford, Hart Publishing, 2003); S. Skogly, *The Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary Fund* (Londres, Cavendish, 2001); P. Sands y P. Klein, *Bowett’s Law of international Institutions*, quinta edición (Londres, Sweet and Maxwell, 2001), págs. 458 y 459; Thomas Buergenthal, “The World Bank and Human Rights,” en E. Brown Weiss, A. Rigo Sureda y L. Boisson de Chazournes (ed.), *The World Bank, International Financial Institutions and the Development of International Law* (Washington, D.C., American Society of International Law, 1999); Daniel D. Bradlow “The World Bank, the IMF and Human Rights”, *Transnational Law and Contemporary Problems*, vol. 6, núm. 1 (segundo trimestre de 1996).

<sup>57</sup> Véase Banco Mundial, *Extracting sustainable advantage? A review of how sustainability issues have been dealt with in recent IFC and MIGA extractive industries projects*, Final Report, Compliance Advisor Ombudsman (Washington, D.C., Banco Mundial, abril de 2003), pág. 36.

<sup>58</sup> Banco Mundial, “Legal Opinion on the Human Rights and the Work of the World Bank”, Roberto Dañino, Primer Vicepresidente y Consejero Jurídico, 27 de enero de 2006, párr. 25.

47. También se ha determinado claramente que los Estados deben cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional cuando actúan por conducto de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en *Waite y Kennedy v. Germany*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que “cuando los Estados establecen organizaciones internacionales a fin de mantener relaciones de cooperación o reforzarlas en determinadas esferas de actividad, y cuando atribuyen a esas organizaciones ciertas facultades y les confieren inmunidades, ello puede tener consecuencias para la protección de los derechos fundamentales. No obstante, sería incompatible con el propósito y la finalidad de la Convención que los Estados Contratantes se vieran de ese modo absueltos de su responsabilidad con arreglo a la Convención en relación con el campo de actividad comprendido en el alcance de esas facultades”<sup>59</sup>. De igual modo, en las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se subraya que las obligaciones de los Estados de proteger los derechos económicos, sociales y culturales se aplican también a su participación en las organizaciones internacionales, en las que actúan colectivamente.

48. Por último, un aspecto importante del deber de la cooperación internacional reflejado en la Carta de las Naciones Unidas y en tratados internacionales de derechos humanos que tienen fuerza jurídica obligatoria es que los Estados partes, individualmente o en su calidad de miembros de instituciones internacionales, no deben adoptar políticas o prácticas que pongan en peligro el disfrute de los derechos humanos. En consecuencia, la condicionalidad impuesta a los préstamos o al alivio de la carga de la deuda no deben menoscabar la capacidad de los Estados de prestar servicios públicos básicos o facilitar el acceso a dichos servicios.

### III. Necesidad de mantener la coherencia en el plano normativo

49. El comercio, la deuda y la política financiera son componentes importantes de la estrategia de desarrollo de todos los países. Por lo tanto, la coherencia entre esos componentes es imprescindible para que las políticas económicas nacionales e internacionales respalden adecuadamente las políticas nacionales de desarrollo. La adopción de medidas de política en cualquiera de esas esferas independientemente de las demás entraña el riesgo de que las medidas que se adopten en una de ellas socaven los objetivos de las que se adopten en otra, en lugar de contribuir a su logro.

50. La necesidad de mantener la coherencia normativa entre las políticas comerciales, financieras y monetarias se ha reconocido en diversas decisiones internacionales, entre ellas la Declaración del Milenio, el Consenso de São Paulo, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su 11º período de sesiones <sup>60</sup>, el Consenso de Monterrey, aprobado

<sup>59</sup> (1999) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, demanda núm. 26083/14, resolución de la Gran Sala de 18 de febrero de 1999, párr. 67. Véase también *Mathews v. United Kingdom*, demanda núm. 24833/94, resolución de la Gran Sala de 18 de febrero de 1999, párr. 32; Willem van Genugten, “Tilburg Guiding Principles on World Bank, IMF and Human Rights”, en Willem van Genugten, Paul Hunt y Susan Mathews (ed.), *World Bank, IMF and Human Rights* (2003), págs. 247 a 255, y A/CN.4/564/Add.2.

<sup>60</sup> El párrafo 17 del Consenso de São Paulo dice lo siguiente: “Para que los países en desarrollo puedan obtener mayores beneficios de la mundialización y alcanzar los objetivos del desarrollo internacional, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio, es necesario mejorar la

por la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo<sup>61</sup> y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005<sup>62</sup>.

51. Más recientemente, las Naciones Unidas han puesto de relieve que el comercio, el desarrollo y las finanzas deben considerarse en forma integrada y coherente a fin de crear y mantener un entorno propicio para maximizar los beneficios del desarrollo para todos los países. Como señala el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales en el prefacio del *Estudio Económico y Social Mundial, 2010*, es necesario reforzar la coordinación mundial del proceso de adopción de decisiones económicas para reducir al mínimo el número de casos en que las normas relativas al comercio, la ayuda, la deuda, las finanzas, las migraciones, la sostenibilidad del medio ambiente y otras cuestiones de desarrollo se contradigan entre sí<sup>63</sup>.

52. También es digno de mención que en los documentos básicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Estados miembros declaran su intención de cooperar con el FMI y el Banco Mundial con vistas a alcanzar “una mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial”, respetando mutuamente, al mismo tiempo, los mandatos y la independencia de cada institución<sup>64</sup>. Ese compromiso se refleja en los acuerdos concertados entre la OMC y el FMI y el Banco Mundial, en el que se reconocen los vínculos entre los diversos aspectos de la formulación de la política económica que están comprendidos en el alcance de los respectivos mandatos de esas instituciones y que los obligan a “celebrar consultas entre sí para alcanzar una mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial”<sup>65</sup>. Sin embargo, en la práctica esa cooperación parece limitarse a conceder la condición de observadores a altos funcionarios de cada institución en las reuniones ministeriales de las demás —de lo cual difícilmente podría decirse que es un mecanismo para lograr la coherencia de

---

coherencia y compatibilidad de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales” (véase TD/412, parte I).

<sup>61</sup> El párrafo 52 del Consenso de Monterrey dice así: “Reconocemos la urgente necesidad de aumentar la coherencia, la buena gestión y compatibilidad de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales a fin de complementar la labor a nivel nacional”. Véase también el párrafo 4, que establece el compromiso de “aumentar la coherencia y la cohesión de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales”. Véase *Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey (México), 18 a 22 de mayo de 2002* (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo, párr. 60.

<sup>62</sup> Véase la resolución 60/1.

<sup>63</sup> *World Economic and Social Survey 2010* (véase la llamada 8), pág. xxiv.

<sup>64</sup> Véase la Declaración sobre la Contribución de la Organización Mundial del Comercio al Logro de una Mayor Coherencia en la Formulación de la Política Económica a Escala Mundial, que forma parte del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994.

<sup>65</sup> *Acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio* (WT/L/195, anexo I, párr. 2) y *Acuerdo entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento y la Organización Mundial del Comercio* (WT/L/195, anexo II, párr. II). Véase también Organización Mundial del Comercio, *Acuerdos entre la OMC y el FMI y el Banco Mundial, Decisión adoptada por el Consejo General en su reunión celebrada los días 7, 8 y 13 de noviembre de 1996* (WT/L/194, 18 de noviembre de 1996).

las políticas financieras y sobre el comercio internacional<sup>66</sup>. Por lo tanto, es importante crear un mecanismo internacional para lograr esa coherencia normativa.

53. También es importante asegurar que la formulación de la política económica mundial sea compatible con la realización de los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Se ha observado que en el preámbulo del Acuerdo por el que se establece la OMC se describen los propósitos de la organización en términos que son ampliamente coherentes con los objetivos humanos en los que se basan los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>67</sup>.

#### IV. Conclusiones y recomendaciones

54. Según el informe de 2008 del Equipo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en un buen número de países que se han beneficiado de medidas para el alivio de la deuda, los indicadores de vulnerabilidad a la deuda se han deteriorado, en parte porque esos países siguen teniendo grandes problemas para financiar su desarrollo. Se considera que 21 países pobres muy endeudados (incluyendo los 14 que han pasado el punto de culminación) corren un riesgo entre moderado y alto de volver a tener problemas de deuda. Se estima que 10 (la mayoría de los cuales no han alcanzado el punto de culminación) tienen dificultades con su deuda<sup>68</sup>. En el informe se llega a la conclusión de que no se ha alcanzado plenamente la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de abordar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo<sup>69</sup>.

55. Las estrategias de desarrollo con orientación de mercado propugnadas en el Consenso de Washington (en buena parte desacreditado), que las instituciones financieras internacionales imponen a los países en desarrollo, no ayudan a éstos a lograr un desarrollo sostenible centrado en el ser humano y son políticas contrarias a las que anteriormente promovieron el desarrollo moderno de Europa occidental y el Japón. Esas políticas de desarrollo abarcaban, entre otras cosas, la reforma agraria, inversiones en el capital humano, la protección selectiva del comercio, el crédito dirigido y apoyo a los gobiernos para desarrollar la capacidad industrial y tecnológica, al tiempo que se exponía gradualmente a las empresas a la competencia mundial<sup>70</sup>.

56. Para reducir la pobreza en los países en desarrollo no sólo es necesario prestar asistencia para aliviar la deuda y promover el desarrollo sino también modificar las normas del comercio mundial para brindar a esos países mejores oportunidades comerciales para estimular su desarrollo y su crecimiento. En particular, deberían eliminarse los obstáculos que entorpecen el acceso de esos

<sup>66</sup> Caliri, *Debt and Trade* (llamada 3), pág. 8.

<sup>67</sup> Robert Howse y Ruti G. Teitel, *Beyond the Divide: The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the World Trade Organization*, Occasional Paper núm. 30 (Ginebra: Friedrich Ebert Stiftung, abril de 2007).

<sup>68</sup> *Objetivo de Desarrollo del Milenio 8: Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo*, Informe del Equipo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2008, número de venta: S.08.I.17, pág. xi.

<sup>69</sup> *Ibid*, pág. 38.

<sup>70</sup> *World Economic and Social Survey 2010* (véase la llamada 8 *supra*).

países, porque tienen un efecto de distorsión del comercio, como las restricciones a la actividad comercial y las subvenciones a la agricultura.

57. El derecho al desarrollo requiere un entorno nacional e internacional propicio que, entre otras cosas, ofrezca a los gobiernos cierto margen de acción en el plano normativo, para aplicar políticas nacionales de desarrollo que respondan a las necesidades de las poblaciones de sus países. En consecuencia, en los programas de alivio de la carga de la deuda se debería asegurar que los países endeudados conservaran ese “margen de acción” para aplicar estrategias que mejoraran su estructura de producción, a fin de iniciar la transición hacia la exportación de productos más dinámicos con un mayor contenido de conocimientos y tecnología; exportar productos de mayor valor añadido; diversificar sus economías, estimular el crecimiento de las ramas de producción incipientes, y proporcionar una financiación adecuada, en condiciones razonables al sector productivo nacional.

58. En el Marco de sostenibilidad de la deuda se debería dar más prioridad a la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales y a los derechos humanos que al mejoramiento del reembolso de la deuda. Ello estaría en consonancia con los objetivos ostensibles de las iniciativas para el alivio de la deuda multilateral encaminadas al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, en los análisis de la sostenibilidad de la deuda se debería establecer una correlación entre los ingresos públicos y la necesidad de los países de financiar sus planes de desarrollo, formulados y controlados por ellos mismos, por un lado, y por otro, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En esas evaluaciones se debería dar prioridad a la financiación necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y satisfacer las exigencias más generales del desarrollo humano, incluida la realización de los derechos humanos.

59. Una limitación fundamental del marco conjunto de sostenibilidad de la deuda del FMI y el Banco Mundial es que su gestión está en manos de los acreedores; por consiguiente, se podría decir que carece de objetividad. Las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda en el contexto de ese marco son realizadas por el FMI y el Banco Mundial, ambas instituciones acreedoras. Por esa razón, surge la duda de que esas evaluaciones sean verdaderamente objetivas. Esas evaluaciones deberían ser transparentes e independientes e incluir información sobre el uso de los fondos. Ello sólo se logrará mediante un proceso que equilibre los intereses de los acreedores y de los deudores de conformidad con el principio de la responsabilidad compartida para prevenir y eliminar la posibilidad de que la deuda resulte insostenible. Por consiguiente, es necesario que las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda sean realizadas por un grupo de expertos independientes nombrados por los acreedores y los deudores. A este respecto, el experto independiente insta a los Estados Miembros a que consideren urgentemente la posibilidad de establecer un mecanismo independiente de renegociación de la deuda bajo los auspicios de las Naciones Unidas<sup>71</sup>. Un componente indispensable de un sistema financiero internacional estable es un mecanismo de reestructuración de la deuda

<sup>71</sup> Véase *Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey (México), 18 a 22 de marzo de 2002* (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo, párr. 60.



soberana, imparcial e independiente, que cumpla con eficacia y ecuanimidad una función de mediación entre deudores y acreedores<sup>72</sup>.

60. Además, para abordar el problema de la sostenibilidad de la deuda en forma sistémica, es necesario que la comunidad internacional adopte un marco vinculante sobre la concesión y obtención de préstamos en forma responsable, en el que se detallen normas jurídicamente reconocidas sobre la responsabilidad en materia de financiación. La aplicación de ese marco debería ser supervisada por un grupo de arbitraje imparcial y transparente bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

61. Para poner en práctica las estrategias de desarrollo nacionales se necesitan corrientes estables de ayuda; un régimen comercial multilateral justo que ofrezca a los países un margen para reforzar su capacidad de producción nacional y les permita alcanzar objetivos relacionados con un desarrollo sostenible, y mercados financieros estables y previsibles<sup>73</sup>. Para ello se requerirán profundas reformas en la arquitectura internacional existente de la ayuda, el comercio y las finanzas, y medidas para asegurar la coherencia normativa en esas tres esferas.

62. Se debería considerar urgentemente la posibilidad de establecer un organismo internacional (en el marco de las Naciones Unidas) para abordar en forma sistémica las cuestiones de la coherencia y la compatibilidad en la formulación de normas multilaterales.

63. Es importante que las instituciones financieras internacionales respeten las normas comúnmente aceptadas de buena gobernanza que exigen a los países a los que conceden préstamos, incluidas las de transparencia, responsabilidad, ecuanimidad y control. A este respecto, es importante recordar que, en el Consenso de Monterrey, la comunidad internacional se comprometió a promover “una buena gestión pública en todos los niveles”<sup>74</sup>.

64. El experto independiente estima que el alivio de la carga de la deuda y la concesión de nuevos préstamos no debe supeditarse a la privatización, la desreglamentación de las inversiones y la liberalización del comercio, medidas todas que han sido no sólo ineficaces sino también perjudiciales para los países pobres muy endeudados, e incompatibles con las normas de gobernanza aceptadas, incluidos el control y la participación. No obstante, apoya la imposición de condiciones tendientes a asegurar una participación eficaz de la sociedad civil en los procesos relacionados con los DELP y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas del empleo y la gestión de los préstamos o de los fondos liberados para el alivio de la carga de la deuda.

65. El experto independiente comparte la opinión del Equipo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de que, para mejorar el acceso a los mercados para los países en desarrollo, es necesario dar prioridad al comercio y a sus nexos con el desarrollo y la reducción de la pobreza en las estrategias nacionales de desarrollo; reducir sustancialmente los

<sup>72</sup> *World Economic and Social Survey 2010* (véase la llamada 8 *supra*).

<sup>73</sup> *Ibid.*, pág. xii.

<sup>74</sup> Véase *Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey (México), 18 a 22 de marzo de 2002* (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo, párr. 60.

**aranceles impuestos por los países desarrollados a los productos agrícolas, los textiles y las prendas de vestir procedentes de los países en desarrollo; y acelerar en los países desarrollados la reducción de las subvenciones nacionales y a las exportaciones que distorsionan el comercio<sup>75</sup>.**

---

---

<sup>75</sup> Objetivos de Desarrollo del Milenio 8, Informe del Equipo de Tareas 2008 (véase la llamada 68 *supra*), págs. 19 a 24.